

RE: SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN PROCESO DE IMPUGNACIÓN DE ACTAS No. 85250-31-89001-2019-00025-01.

Secretaria Tribunal Superior - Yopal - Seccional Tunja <sectsyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Vie 7/05/2021 4:15 PM

Para: Cooperativa Cointco <cointco@yahoo.com>

Doctor  
Nicolas Patarroyo Barrera

Cordialmente acuso recibido.

Atentamente,

César Armando Ramírez López  
Secretario

---

De: Cooperativa Cointco <cointco@yahoo.com>

Enviado: viernes, 7 de mayo de 2021 3:33 p. m.

Para: Secretaria Tribunal Superior - Yopal - Seccional Tunja <sectsyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co>; pmsr7781@hotmail.com <pmsr7781@hotmail.com>; lijabeba <lijabeba@hotmail.com>

Asunto: SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN PROCESO DE IMPUGNACIÓN DE ACTAS No. 85250-31-89001-2019-00025-01.

Buenas tardes

Respetuoso saludo,

Por medio de la presente me permito Adjuntar poder, sustentación del recurso de apelación proceso de impugnación de actas No. 85250-31-89001-2019-00025-01.

Solicito el favor confirmar recibido. Muchas gracias

Sin otro particular.

Cordialmente;

**Nicolas Patarroyo Barrera**  
**Representante Legal**  
**COINTCO**

**Señores:**

**TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE YOPAL**  
**M.P. Dra. GLORIA ESPERANZA MALAVER DE BONILLA**  
Yopal, Casanare

**Referencia:** ESCRITO DE SUSTENTACIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN.

**Proceso:** IMPUGNACIÓN DE ACTAS DE ASAMBLEA.

**Radicación:** 85250-31-89001-2019-00025-01.

**Demandante:** PEDRO MANUEL SUAREZ RINCON. LUZ MARLENY TARACHE. ROSA MARIA VILLAMARIN LOPEZ. JOSE MARIA GONZALEZ CRUZ y RAMON GONZALEZ CRUZ.

**Demandado:** COOPERATIVA MULTIACTIVA DE INVERSIONES INGENIERIA Y TRANSPORTE – COINTCO.

**CAROLINA RAMIREZ OTALORA**, identificada civil y profesionalmente como aparece al pie de mi correspondiente firma; en mi condición de apoderada judicial de la parte demandada **-COOPERATIVA MULTIACTIVA DE INVERSIONES INGENIERIA Y TRANSPORTE – COINTCO-**, conforme al poder que fue allegado al despacho de primera instancia en su oportunidad legal; por medio del presente escrito, y oportunamente, me permito presentar escrito de sustentación al recurso de apelación presentado contra la sentencia de primer grado proferida el veinte (20) de Noviembre de dos mil veinte (2020) por el **JUZGADO PROMISCOUO CIVIL DEL CIRCUITO DE PAZ DE ARIPORO**; recurso admitido por su **DESPACHO** mediante providencia del 29 de abril de 2021, en el cual se dispuso la sustentación escrita. Sustentación que hago en los siguientes términos:

La suscrita apoderada, previo a la sustentación del recurso, considero pertinente manifestarle al **DESPACHO** que, la parte demandada, la cual represento, remitió vía e-mail al despacho de primera instancia el 12 de febrero de 2021 un memorial mediante el cual revoco el poder al Dr. Roberto Vargas Ramírez, y confirió poder a la suscrita, por lo que, a partir de dicha fecha tengo calidad de apoderada judicial de la parte demandada; y adjunto al presente escrito los memoriales referidos.

## **I. OBJETIVOS:**

1. Que se revoque en su totalidad la decisión proferida en primera instancia por contener vías de hecho.
2. Que, como consecuencia de lo anterior, profiera fallo donde se declare probada las excepciones de la demanda teniendo en cuenta la legalidad; la eficacia, la existencia, y validez, de la reunión de asamblea general celebrada el 30 de marzo de 2019, así como las actuaciones y decisiones allí adoptadas, por cuanto cumplió con los presupuestos establecidos en los estatutos de la Cooperativa y demás normatividad que regula este tipo de actuaciones.
3. Colorario de lo anterior , que se profiera una sentencia desestimatoria a las pretensiones presentadas por la parte demandante.

4. Que como consecuencia de lo anterior, los actos y decisiones adoptadas posterior a dicha fecha conserven plena validez y eficacia, acorde con lo referido por la SIC en resolución No. 22229 del 20 de junio de 2019, al determinarse que se cumplió cabalmente con todos los requisitos legales que establecen las normas reglamentarias, aunado a que las actuaciones realizadas en dicha asamblea siempre se ciñeron a buscar la continuidad, funcionamiento, y en general el desarrollo de las actividades negociales, de capitalización y sostenimiento de la Cooperativa COINTCO.
5. Que se condene a la parte demandante al pago a favor de la demandada de las costas, agencias en derecho y los perjuicios que se han ocasionado, debido al presente proceso.

## **I. RAZONES DE INCOFORMIDAD CON LA PROVIDENCIA APELADA**

1. El Juez Aquo omitió pronunciarse frente a las excepciones alegadas en el curso del proceso, exactamente, frente a las excepciones que se pusieron de manifiesto en el alegato de conclusión de la parte demandada (AUSENCIA DE PRESUPUESTOS PROCESALES; CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO O SUSTRACCION DE MATERIA; PRINCIPIO "NADIE PUEDE ALEGAR SU PROPIA CULPA"; CADUCIDAD)

De acuerdo a las disposiciones del artículo 55 de la ley 270 de 1996, en consonancia y concordancia con los artículos 2, 13, 29, 58, 83, 228, 229 y 230 de la Constitución Política de Colombia, de los artículos 85, 90, 280, 281, 282, de la ley 1564 de 2012, y con lo preceptuado por a H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA en sus sentencias: SC2642-2015; 11001-31-03-030-1993-05281-01; y PROCESO T 99864, número de providencia: STP108682018; además, del pronunciamiento de la H. CORTE CONSTITUCIONAL en su sentencia SU635/15; entre otras; resulta claro que, el operador judicial debe manifestarse y resolver sobre todas las situaciones planteadas dentro del proceso, y que deban ser resueltas para que la decisión final garantice el derecho fundamental al debido proceso y el acceso a la administración de justicia; pero el Aquo omitió la debida motivación de la sentencia, ya que no se manifestó ni definió todas las excepciones propuestas, dejando sin resolver, pero exactamente, sin pronunciarse siquiera, sobre las excepciones propuestas en los alegatos de conclusión de la parte demandada; además de no valorar las pruebas recaudadas, conforme a los principios de la sana critica, la rigurosidad e imparcialidad, la razonabilidad, la proporcionalidad y la congruencia, a la hora de pronunciarse sobre las excepciones que definió, que fueron las presentadas con la contestación de la demanda únicamente; con lo cual, incurrió en vías de hecho.

Al operador judicial Aquo le correspondía abordar el estudio y decisión de todos los hechos y planteamientos efectuados en el proceso, incluidas lógicamente las

excepciones, aún las alegadas dentro de los alegatos de conclusión, ya que debía hacer un pronunciamiento sobre las mismas, a efectos de que la sentencia tenga la motivación suficiente y adecuada, y aborde todos los planteamientos del proceso, ya que un caso contrario, como ocurrió en la sentencia objeto de este recurso, viola el debido proceso y el acceso a la administración de justicia de la parte demandada -entre otros derechos- ya que, el Aquo no hizo ningún pronunciamiento sobre las **excepciones de AUSENCIA DE PRESUPUESTOS PROCESALES; CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO O SUSTRACCION DE MATERIA; PRINCIPIO "NADIE PUEDE ALEGAR SU PROPIA CULPA"; CADUCIDAD**; las cuales fueron puestas en conocimiento del Aquo en los alegatos de conclusión de la parte demandada, sin que éste (A quo) se pronunciara frente a las mismas en la sentencia, faltando a su deber legal de motivar debidamente la sentencia abordando todos los temas planteados, a efectos de que haya congruencia en la decisión. Por tanto, ante la absoluta falta de motivación y decisión frente a las excepciones propuestas en los alegatos de conclusión, resulta obvio que estas deben prosperar, por lo que así ruego sea declarado por los honorables magistrados del Tribunal.

2. El Aquo incurrió en error grave, defecto procesal y sustancial, al no manifestarse sobre las excepciones de **AUSENCIA DE PRESUPUESTOS PROCESALES; CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO O SUSTRACCION DE MATERIA; PRINCIPIO "NADIE PUEDE ALEGAR SU PROPIA CULPA"; CADUCIDAD**; y esta omisión del Aquo viola los derechos fundamentales de la parte demandada, como lo son el debido proceso y el acceso a la administración de justicia; los cuales entrañan la necesidad de que las providencias sean debidamente motivadas, se refieran a todos los planteamientos del proceso; garanticen el derecho de contradicción y defensa, y tengan concordancia y congruencia; situaciones todas estas que quedaron omitidas por el Aquo al no manifestarse ni resolver sobre las excepciones propuestas, conforme el deber que le impone el articulado legal y jurisprudencial, especialmente el deber que impone el artículo 281 del CGP de congruencia en la sentencia, y el artículo 282 de resolución sobre excepciones, el cual, además, no solo impone el deber al Aquo de resolver sobre las excepciones presentadas por las partes, sino al reconocimiento oficioso de las que el Juez encuentre probadas; lo que acrecienta el yerro del Aquo, para nuestro caso.
3. La omisión del Aquo a manifestarse y resolver sobre las excepciones propuestas en los alegatos de conclusión genera una violación directa e indirecta a los derechos fundamentales del debido proceso y el acceso a la administración de justicia, de la parte demandada; puesto que, inicialmente el Aquo vulnera el derecho al no pronunciarse (directa), y luego, si el Ad quem se pronuncia y resuelve desfavorablemente sobre esta excepción, el demandado carece de una segunda instancia para controvertir la decisión; situación que indefectiblemente agrava la vulneración de los derechos del demandado.
4. La omisión del A quo a manifestarse sobre las excepciones formuladas en el alegato de conclusión de la parte demandada; le impidió tener en cuenta que, se avizora una extemporaneidad en la presentación de la demanda (junio 7 de 2019), pues se presentó más de dos meses después de celebrada la asamblea del 30 de marzo de 2019 (art. 282 del CGP-caducidad como excepción de mérito), por lo que, la demanda no podía

tramitarse sino rechazarse, por lo que su admisión y tramite violó el debido proceso y generó un grave daño y perjuicio a la parte demandada.

Téngase en cuenta que, el demandante en sus pretensiones solicita que se declare la nulidad por ineficacia de la reunión ordinaria del 30 de marzo de 2019; así como la nulidad de las decisiones adoptadas en la reunión ordinaria del 30 de marzo de 2019; y la nulidad de las decisiones adoptadas en la reunión del 30 de marzo de 2019; en conclusión, el demandante solicita la nulidad de la reunión de asamblea general ordinaria del 30 de marzo de 2019 y de las decisiones que allí se tomaron; razón por la cual, el término de caducidad aplicable a esta acción judicial es el que se cuenta desde la fecha en que se llevó a cabo la reunión ordinaria de asamblea general, esto es, el 30 de marzo de 2019, generándose la caducidad de la acción el 30 de mayo de 2019, por lo que, la demanda se presentó de manera extemporánea (junio 7 de 2019), lo que genera el fenómeno jurídico de la caducidad, la cual es insaneable.

Pero, si se tuviera en cuenta que, la caducidad solo pudiera contarse desde el registro del acta que contiene los hechos y decisiones de la reunión ordinaria de asociados del 30 de marzo de 2019, entonces tendría que determinarse que ésta (el acta) fue radicada el 09 de abril de 2019, e impugnada en la misma fecha, por lo cual sus efectos fueron suspendidos, situación que genera la inexistencia o invalidez jurídica del acto hasta que se resuelva su impugnación, por lo que, nuevamente tenemos que atenernos a la fecha del 30 de marzo de 2019, fecha en la que se llevó a cabo la reunión de asamblea, como fecha para el conteo del término de caducidad para la acción, y volvemos a determinar que para la fecha en que se presentó la demanda (junio 7 de 2019) ya había operado el fenómeno jurídico de la caducidad; la cual es insaneable.

5. El A quo no tuvo en cuenta y no se manifestó sobre la excepción de ausencia de presupuestos procesales, ya que los demandantes no presentaron prueba idónea de la legitimidad por activa, pues no se evidencia dentro del expediente prueba de su calidad de asociados con la cooperativa, conforme lo dispone el artículo 85, inciso 2 del CGP; y no se allegó este documento a lo largo de la actuación; siendo de resorte del **DESPACHO** de primera instancia su control, puesto que hace parte de los presupuestos necesarios para la admisión de la demanda, la cual sin esto, fue admitida con ausencia de presupuestos procesales, situación que implica un favorecimiento al demandante, y una consecuencial violación de los derechos fundamentales del demandado; así como una irregularidad procesal, que de no sanearse en su oportunidad legal y procesal, genera el rechazo de la demanda; por lo que esta no podía tramitarse.
6. El A quo no tuvo en cuenta y no se pronunció sobre la excepción de carencia actual de objeto por hecho superado o sustracción de materia, por lo que no tuvo en cuenta que, los hechos que dieron origen a la demanda fueron superados, ya que, el 7 de marzo de 2020 se celebró una asamblea general ordinaria de asociados, donde hubo quórum deliberatorio y decisorio y se aprobó elección de un nuevo concejo de administración; reunión en la cual participaron activamente todos los demandantes; por lo tanto, es inocuo dejar sin efectos lo relativo a la reunión de asamblea del 30 de marzo de 2019, o

el acta No. 013; ya que la asamblea general ordinaria del 7 de marzo de 2020 quedo debidamente registrada en la cámara de comercio sin que se impugnara su registro, así como tampoco la asamblea; situación que constituye un hecho con consecuencias jurídicas suficientes para predicar que: la acción judicial que se cursa y que es objeto del presente recurso, carece de objeto por sustracción de materia, dando lugar a un hecho superado, que debe ser declarado por el despacho para que se vea garantizado el libre y normal desarrollo y operación de la **COOPERATIVA**, así como los derechos de los asociados que participaron en la misma, y que fueron todos.

Además, como hecho sobreviniente, el 03 de abril de 2021 se llevó a cabo una asamblea general por derecho propio, en la cual se tomaron decisiones y se eligieron administradores, y de la cual también se hizo su inscripción y registro en la Cámara de Comercio del Casanare –como consta en el certificado de existencia y representación legal actual y vigente- situación que, de igual manera genera la carencia actual de objeto por hecho superado o sustracción de materia.

7. El A quo decidió en el numeral 2 de la parte resolutiva de la sentencia declarar que se encuentran estructurados los presupuestos de inejecución de las decisiones de la asamblea de asociados de fecha 30 de marzo de 2019 de COINTCO; pero dicha decisión es un yerro mayúsculo si se tiene en cuenta que, las previsiones del artículo 190 del código de comercio dispone expresa y taxativamente que la contravención a las disposiciones del artículo 186 del código de comercio generan la inejecución de la asamblea; y que, las que se adopten sin el número de votos previstos en los estatutos o en las leyes, o excediendo los límites del contrato social, serán absolutamente nulas; y para nuestro caso, la reunión ordinaria de asamblea general de asociados del 30 de marzo de 2019 se llevó a cabo en el dominio social de la COOPERATIVA, dando cumplimiento a las disposiciones estatutarias sobre convocatoria a la asamblea y quorum, como consta en el acta que se levantó de dicha reunión (acta 13), y como se puede concluir de la revisión de los estatutos y los testimonios y confesiones recogidas en el curso de la audiencia del artículo 372 del CGP; donde queda claridad que hubo lista de asociados hábiles e inhábiles y que la misma “fue rota en pedacitos” conforme la confesión del demandante PEDRO MANUEL SUAREZ RINCON; que la JUNTA DE VIGILANCIA tuvo conocimiento del listado de asociados hábiles e inhábiles, tan así, que suscribió acuerdos de pago con los asociados PEDRO MANUEL SUAREZ RINCON y LUZ ELENA PEREZ CURCHO, como lo confiesa la señora LUZ MARLENY TARACHE, quien es demandante, y para la fecha de los hechos objeto de Litis oficiaba como Presidente del Consejo de administración; y que, quien tenía a cargo la convocatoria a la asamblea era el consejo de administración en cabeza de LUZ MARLENY TARACHE como su presidente, y quien funge como demandante dentro del proceso objeto de este recurso; en definitiva, aparece claro que si se cumplieron las reglas de convocatoria, ya que a la reunión de asamblea general del 30 de marzo de 2019 asistieron todos los asociados, situación que prueba que la convocatoria cumplió su propósito; además, todos los asociados estuvieron presentes en la reunión, ya que si se revisa el acta y los testimonios rendidos en interrogatorio, puede apreciarse que todos los asociados de la cooperativa hicieron presencia en la asamblea en uno u otro momento, y finalmente las decisiones que se adoptaron en la reunión contaron con el quorum deliberatorio y decisorio mínimo,



conforme a la ley y a los estatutos, que corresponde a 10 asociados, como consta en el acta; lo que implica por definición racional y legal que, no hubo contravención estatutaria ni legal que diera lugar a una declaratoria de ineficacia ni de nulidad, como obtusamente lo considero el A quo.

- Declarar que se encuentran estructurados los presupuestos de ineficacia de las decisiones de la asamblea de asociados de fecha 30 de marzo de 2019 de COINTCO, constituye una violación a los derechos fundamentales de reunión y debido proceso de los asociados que participaron de la asamblea general del 30 de marzo de 2019 ejerciendo sus legítimos derechos de reunión, de asociación, del ejercicio libre del desarrollo empresarial; conforme a lo consignado en el acta 13.
8. El A quo no tuvo en cuenta dentro del análisis del caso y apreciación probatoria, que los asociados demandantes participaron de la asamblea general, asistieron, contestaron el llamado a lista y se retiraron voluntariamente, buscando entorpecer el trámite de la asamblea, y aun después de observar que incluso sin su participación había quorum para continuar con el trámite, decidieron ausentarse voluntariamente, caprichosamente, rechazando la posibilidad de participar en la misma a pesar de que su participación ya había sido aceptada.
- La actitud de los asociados que no participaron de la asamblea, sino que se retiraron voluntariamente, para luego demandar la reunión de asamblea, no es otra cosa que un acto de sabotaje a la COOPERATIVA y a los demás asociados, que no puede “premiarse” por parte del A quo, por que dicha situación vulnera los derechos de reunión, asociación, y libre desarrollo empresarial que ejercieron los asociados que participaron de la asamblea, por el bienestar de la COOPERATIVA, y en función de sus derechos y deberes para con la misma, y para con sus asociados.
  - De los testimonios rendidos en interrogatorio se evidencian diferencias entre los asociados, pero esto no significa que las decisiones tomadas en la reunión impugnada, y consignadas en el acta 13 estén viciadas con irregularidades causantes de nulidad o ineficacia; ya que se cumplieron las disposiciones estatutarias y legales para convocar y tramitar la reunión, así como para tomar decisiones. El hecho de que algunos asociados se hayan retirado de la reunión de manera voluntaria y/o caprichosa, no quiere decir de ninguna manera que la reunión no pudiera llevarse a cabo, o que por dicha causa se configuren los presupuestos de nulidad e ineficacia, ya que, si la convocatoria a la reunión no fue hecha en debida forma -entonces como llegaron ellos a la reunión-, lo que demuestra que si se atendieron los requisitos para la convocatoria; además, si la convocatoria llegó a tener fallas, las mismas son atribuibles al consejo de administración de la fecha de los hechos, el cual estaba constituido por quienes aquí fungen como demandantes, y estarían utilizando su propio error en su favor, situación que no puede acoger el despacho de ninguna manera, porque constituye un yerro en la valoración probatoria, violando el principio de NADIE PUEDE ALEGAR SU PROPIA CULPA; sobre el cual, el A quo omitió

manifestarse en la sentencia, violando los derechos fundamentales de la demandada, puesto que dicha excepción fue propuesta en los alegatos de conclusión de la parte demandada.

9. El A quo no valoro razonadamente las pruebas ya que, omitió totalmente la confesión hecha por PEDRO MANUEL SUAREZ RINCON de que había roto en pedacitos el listado de asociados hábiles e inhábiles porque considero que eso no era un listado de asociados hábiles e inhábiles; situación supremamente grave ya que –el A quo- no tuvo en cuenta que, el demandante fue quien destruyó una prueba de la que posteriormente niegan su existencia, y de la que solicitan a la parte demandada que se allegue al proceso, poniendo a la parte demandada en la imposibilidad material de allegar una prueba que fue desaparecida por el mismo demandante, y sin que el A quo haga ninguna manifestación sobre el suceso, el cual constituye una infracción penal por parte del demandante; pero para este caso, lo que importa es que el A quo no tuvo en cuenta la confesión del demandante sobre dicha prueba; situación que de haberse tenido en cuenta cambia totalmente la valoración que del caso debía hacer el A quo; y, esto, además, demuestra como el A quo no tuvo en cuenta en lo más mínimo el alegato de conclusión de la parte demandada, donde se le puso de manifiesto dicha situación.

- 9.1 No hay prueba de que NICOLAS PATARROYO, LAURA CAMARGO, y DIANA GONZALEZ no sean asociados de la Cooperativa, ya que lo único que hay son manifestaciones de los demandantes de un “supuesto” acuerdo para que estos asociados se vieran exceptuados de algunos requisitos para su ingreso a la Cooperativa, el cual, después de realizarse su inscripción, les confiere derechos, los cuales no podían ser desconocidos ni puestos en tela de juicio por el A quo, porque dentro del expediente obra prueba documental de su condición de asociados de la Cooperativa, la cual no fue valorada por el A quo, quien a cambio de valorar la prueba documental obrante en el expediente y debidamente aportada con la contestación de la demanda, prefirió dar credibilidad al testimonio de un contador que se presentó en las instalaciones de la cooperativa, de manera engañosa, el día 17 de noviembre de 2020, pretendiendo llevar a cabo una auditoria a la Cooperativa, la cual dijo estar autorizada por el Despacho judicial y ordenada por el señor PEDRO MANUEL SUAREZ RINCON y la señora LUZ MARLENY TARACHE, constituyendo dicha situación una falsedad, la cual está dentro del expediente ya que el apoderado judicial de la parte demandante dijo haber hecho llegar al Despacho la respectiva solicitud, constituyéndose esto en una violación al debido proceso para obtener una prueba que Nunca fue autorizada por el despacho, ya que, lo que estaba avalado por el despacho era la exhibición de unos documentos, específicamente: i. libro de asociados de la cooperativa; ii. soportes contables del pago de aportes sociales con sus acuerdos de pago si los hubiese.

Cabe destacar que, el libro de registro de asociados fue debidamente aportado en fotocopia por la parte demandada con la contestación de la demanda, razón por la



cual, resultaba innecesario que dicho libro se entregara a la parte demandante; pero sin embargo se puso a disposición de ellos para que tomaran las copias que necesitaban, de lo cual llevaron 21 folios -como consta en el acta de entrega que se suscribió y donde quedo constancia de que el demandante pudo llevar la información documental que solicitó, de acuerdo a lo aprobado por el despacho judicial; siendo por tanto faltos a la verdad los testimonios de la parte demandante y su “prueba pericial” (por cierto nula de pleno derecho por violación del debido proceso, ya que los demandantes buscaron recaudar una prueba que nunca fue autorizada por el despacho –auditoria-).

- El A quo no se pronunció frente a la violación del debido proceso por parte de la demandante, quien se presentó en las instalaciones de la parte demandada a través de un contador y su asistente, a llevar a cabo una prueba pericial de auditoria, sin que la misma hubiese sido ordenada por el despacho, ya que había sido ordenada una exhibición documental, concreta y específica; por lo que, el testimonio que tomo el A quo del contador público enviado por los demandantes a hacer una auditoria resultaba ilegal, y el A quo a cambio de pronunciarse sobre dicha situación, lo que hizo fue tomar el testimonio del contador, como si se tratara de un peritaje debidamente decretado (que no lo fue), y además, si hubiese habido la necesidad de un peritaje o experticia contable, o auditoria, la misma no habría podido ser delegada al demandante, sino que tendría que haber sido dispuesta para que se llevara a cabo por parte de un auxiliar de la justicia, debidamente nombrado por el A quo, en su oportunidad y trámite legal.
- Por lo anterior, la valoración que el A quo hizo del testimonio pericial del contador resulta violatorio del derecho fundamental al debido proceso de la parte demandada, ya que esta prueba fue obtenida de manera irregular, lo que la hace nula.

**10.** Finalmente, Honorables Magistrados, para establecer las fallas y yerros del A quo en la valoración de su postura frente a las situaciones que se desarrollaron previo a la reunión de asamblea y dentro de la misma, respetuosamente me permito hacer un análisis de esto, así:

El operador judicial –Aquo-, acogiendo las interpretaciones de la parte demandante concluye que, el apartado: “Si dentro de la hora siguiente a la fijada en la convocatoria, no hubiere integrado este quórum” (artículo 35 estatutario) traduce que esta mención horaria constituye un término perentorio, improrrogable e insalvable, situación claramente mal entendida, ya que la consecuencia de que el quorum no se haya integrado dentro de la primera hora de la asamblea, no es que la asamblea se deba terminar, sino que se debe dejar una constancia en el acta respectiva, de dicha situación, lo que simplemente significa dejar una anotación, la cual de ninguna manera está prevista con una consecuencia legal, ya que el texto expreso del artículo 35 permite que se continúe el desarrollo de la asamblea.

Luego entonces, lo primero que debe destacarse en este asunto es que, el término de una hora dispuesto en el artículo 35 estatutario, de ninguna manera es perentorio, como pareciere asumirlo el A quo.

Ahora bien, una vez acontecido el hecho -dentro de la asamblea general-, que transcurrida una hora desde su inicio no hubiese el quorum deliberatorio conformado por la mitad de los asociados hábiles, se debe entrar a contemplar de manera excepcional -porque este es el sentido del artículo estatutario, prever las diferentes situaciones que pueden presentarse dentro de la asamblea general-, que el quorum se conforma excepcionalmente entonces, por un número de asociados que debe cumplir dos condiciones a saber: i. no puede ser inferior al 10% de los asociados hábiles, ii. ni inferior al 50% del número requerido para constituir una cooperativa; lo que significa en todo caso, que no puede ser inferior a 10 asociados, cifra que equivale al 50% del número requerido para constituir una cooperativa.

De acuerdo a lo expresamente contemplado en el artículo 35 estatutario resulta claro que, si dentro de la primera hora no se hicieron presentes la mitad de los asociados hábiles convocados, entonces, deberá indicarse dicha situación dentro de la asamblea general, y acto seguido, sin que haya ningún tipo de perentoriedad horaria -ni legal ni estatutaria-, entrar a conformar el quorum de la manera excepcional que se contempla, esto es: i. con un número no inferior al 10% de los asociados hábiles y, ii. Que tampoco sea inferior a 10 asociados; sin haber ninguna referencia a que estos (últimos 10) sean hábiles o inhábiles, puesto que ya estamos ante una situación excepcional que contempla el estatuto para el desarrollo de las asambleas generales de asociados.

Cabe destacar que, las medidas de excepción adoptadas en este artículo estatutario no necesitan ser expresas, ya que no hay obligación ni estatutaria ni legal de que así sea, por lo que simplemente estamos ante una disposición tacita estatutaria, la cual no se interpretó adecuadamente por el A quo, quien con su decisión favoreció el actuar saboteador -de los demandantes- dentro de la asamblea general, quienes impidieron de una y otra manera el normal desarrollo de la asamblea general, y en cambio -el A quo- violó los derechos fundamentales de los asociados que Sí se quedaron dentro de la reunión de asamblea general hasta conformar el quorum valido para tomar decisiones, como efectivamente lo hicieron, al amparo de las disposiciones legales, de los estatutos, y de su condición de asociados de la Cooperativa, el cual no perdieron por que se hayan retirado un número “x” de asociados, o porque el reloj haya dado las 10 am, así como tampoco se hicieron inocuos los efectos de la convocatoria para la asamblea general por que unos asociados se hayan retirado, ya que el quorum no lo conformaba la presencia o no de quienes se retiraron, sino la condición excepcional de que hubiesen 10 asociados, como en efecto los hubo, y así hay constancia en el acta, independientemente de que unos asociados caprichosamente hayan decidido retirarse, intentando violar los derechos de los demás asociados a reunirse conforme la convocatoria los había citado para la fecha, después de atendidos los requisitos previos de convocatoria, listado de asociados hábiles e inhábiles, verificación del listado; constituyendo evidencia clara del cumplimiento de todos estos requisitos, la comparecencia a la asamblea de todos los asociados de la Cooperativa, los cuales en uno u otro momento de la asamblea general de asociados que se desarrolló el 30 de marzo de 2019 hicieron presencia y contestaron llamado a lista, lo que demuestra

claramente que la convocatoria cumplió los requisitos para que asistieran los asociados, amén de que sí hubo listado de asociados hábiles e inhábiles, como lo confeso el demandante PEDRO MANUEL SUAREZ RINCON, quien nuevamente debe decirse: destruyo la prueba. Igualmente, la convocatoria a la asamblea general de asociados, se realizó en legal forma como lo confiesa la presidenta del concejo de administración para dicha fecha, señora LUZ MARLENY TARACHE, encargada y responsable de efectuar dicha convocatoria; y demandante dentro de este proceso.

## II. PRUEBAS.

1. Respetuosamente solicito, dentro de la oportunidad legal, que se decrete como prueba el interrogatorio de **ROSA MARIA VILLAMARIN LOPEZ**, quien es demandante dentro del proceso.

Esta prueba se solicita al amparo de las previsiones del numeral 2 del artículo 327 del CGP, ya que esta prueba fue solicitada en debida forma, en tiempo y oportunidad dentro del proceso en primera instancia, y no pudo ser practicada por razones de fuerza mayor acogidas en su momento por el despacho, sin que hubiese culpa de ello en la parte solicitante (demandante); y la misma resulta absolutamente necesaria para clarificar los hechos alegados dentro del proceso, y la falta de práctica de la misma conduce a la limitación del ejercicio del derecho de defensa.

De adoptarse una decisión contraria, se estaría causando un trauma e inseguridad e inestabilidad jurídica a la cooperativa, lesionando enormemente los intereses de la misma; así como la vulneración de derechos fundamentales y económicos de los asociados que no fungen como demandantes, conllevando incluso a la quiebra y por ende desaparición de la Cooperativa.

En los anteriores términos, dentro del término y oportunidad legal, la suscrita apoderada judicial de la parte demandada, aquí recurrente, sustento el recurso de apelación

Cordialmente,



**CAROLINA RAMIREZ OTALORA**

C.C. No. 1.123.624.253 de San Andrés Isla

T.P. No. 214.614 del C. S. de la J.

E-mail: carolinaramirezotalora@gmail.com

Paz de Ariporo, febrero 12 de 2021

Señor  
**JUEZ PROMISCOU DEL CIRCUITO DE PAZ DE ARIPORO**  
Paz de Ariporo, Casanare

**Referencia: Revocatoria de Poder en proceso de impugnación de actas de asamblea, radicación No. 85250-31-89-001-2019-00025-00. Demandante: Pedro Manuel Suarez Rincón y otros. Demandado: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE INVERSIONES INGENIERIA Y TRANSPORTES "COINTCO".**

**NICOLAS ENRIQUE PATARROYO BARRERA**, en mi condición de Representante Legal de **COOPERATIVA MULTIACTIVA DE INVERSIONES INGENIERIA Y TRANSPORTES "COINTCO"**; en nuestra calidad de demandados dentro del proceso de impugnación de actas de asamblea que se cursa en su Despacho bajo el radicado No. 85250-31-89-001-2019-00025-00, donde es demandante: Pedro Manuel Suarez Rincón y otros; manifiesto que, por medio del presente escrito, y en nuestra condición de poderdantes: **REVOCO EL PODER** otorgado al abogado **ROBERTO VARGAS RAMIREZ**, para que nos representara en el proceso **85250-31-89-001-2019-00025-00**; a partir de la fecha de esta comunicación.

En reemplazo del Dr. **ROBERTO VARGAS RAMIREZ** me permito designar a la **Dra. CAROLINA RAMIREZ OTALORA**, identificada con cedula de ciudadanía número 1.123.624.253 de San Andrés Islas, abogada en ejercicio, portadora de la Tarjeta Profesional No. 214.614 del Consejo Superior de la Judicatura, para que continúe con el trámite del presente proceso; quien quedara con las mismas facultades que se habían otorgado al Dr. **ROBERTO VARGAS RAMIREZ**.

Solicito señor Juez, aceptar esta solicitud y reconocer personería jurídica a nuestra nueva apoderada, en los términos y para los fines del mandato, conforme al poder especial que se adjunta.

Atentamente,



**NICOLAS ENRIQUE PATARROYO BARRERA**  
R.L./ COINTCO





**DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL**  
**Artículo 2.2.6.1.2.4.1 del Decreto 1069 de 2015**



866883

En la ciudad de Yopal, Departamento de Casanare, República de Colombia, el doce (12) de febrero de dos mil veintiuno (2021), en la Notaría Primera (1) del Círculo de Yopal, compareció: NICOLAS ENRIQUE PATARROYO BARRERA, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 1115861309, presentó el documento dirigido a JUEZ PROMISCO DEL CIRCUITO DE PAZ DE ARIPORO y manifestó que la firma que aparece en el presente documento es suya y acepta el contenido del mismo como cierto.

Nicolas Patarroyo

----- Firma autógrafa -----



pkz9rn5w4zqn  
12/02/2021 - 14:12:03



Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante sistema biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.



**CESAR GIOVANNI BARRERA BOHORQUEZ**

Notario Primera (1) del Círculo de Yopal, Departamento de Casanare - Encargado

Consulte este documento en [www.notariasegura.com.co](http://www.notariasegura.com.co)

Número Único de Transacción: pkz9rn5w4zqn



Acta 4



Paz de Ariporo, febrero 12 de 2021

Señor

**JUEZ PROMISCOU DEL CIRCUITO DE PAZ DE ARIPORO**

La Ciudad

**Referencia: PODER ESPECIAL.**

**NICOLAS ENRIQUE PATARROYO BARRERA**, en mi condición de Representante Legal de **COOPERATIVA MULTIACTIVA DE INVERSIONES INGENIERIA Y TRANSPORTES "COINTCO"**; confiero **PODER ESPECIAL**, amplio y suficiente, a la **Dra. CAROLINA RAMIREZ OTALORA**, identificada con cedula de ciudadanía número 1.123.624.253 de San Andrés Islas, abogada en ejercicio, portadora de la Tarjeta Profesional No. 214.614 del Consejo Superior de la Judicatura; para que represente nuestros derechos en el proceso de impugnación de actas de asamblea que cursa en el **JUZGADO PROMISCOU DEL CIRCUITO DE PAZ DE ARIPORO**, bajo el **radicado No. 85250-31-89-001-2019-00025-00**; demandante: Pedro Manuel Suarez Rincón y otros; demandado: **COOPERATIVA MULTIACTIVA DE INVERSIONES INGENIERIA Y TRANSPORTES "COINTCO"**.

Nuestra apoderada queda facultada para presentar recursos ordinarios y extraordinarios, notificarse, conciliar, transigir, desistir, sustituir, reformar; y en general, investida de todas las facultades que resulten necesarias para defender nuestros derechos dentro del proceso para el cual otorgo este poder.

Atentamente,



**NICOLAS ENRIQUE PATARROYO BARRERA**  
C.C. No. 1.115.861.309 de Paz de Ariporo  
R.L./ COINTCO

Acepto,



**CAROLINA RAMIREZ OTALORA**  
C.c. No. 1.123.624.253 de San Andrés Islas  
T.P. No. 214.614 del C.S.J.





**DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL**  
**Artículo 2.2.6.1.2.4.1 del Decreto 1069 de 2015**



866962

En la ciudad de Yopal, Departamento de Casanare, República de Colombia, el doce (12) de febrero de dos mil veintiuno (2021), en la Notaría Primera (1) del Círculo de Yopal, compareció: NICOLAS ENRIQUE PATARROYO BARRERA, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 1115861309, presentó el documento dirigido a JUEZ PROMISCO DE CIRCUITO DE PAZ DE ARIPORO y manifestó que la firma que aparece en el presente documento es suya y acepta el contenido del mismo como cierto.

Nicolás Patarroyo

----- Firma autógrafa -----



xvzx4r8nvmde  
12/02/2021 - 14:15:11



Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante el biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.



CESAR GIOVANNI BARRERA BOHORQUEZ

Notario Primera (1) del Círculo de Yopal, Departamento de Casanare - Encargado

Consulte este documento en [www.notariasegura.com.co](http://www.notariasegura.com.co)  
Número Único de Transacción: xvzx4r8nvmde



Acta 4